

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

3.^a EDICIÓN 2020

Concordancias, jurisprudencia, índice analítico y
normativa complementaria

JOSÉ LUIS GIL IBÁÑEZ
Magistrado



eBook en www.colex.es



LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

CONCORDANCIAS, JURISPRUDENCIA, ÍNDICE ANALÍTICO Y
NORMATIVA COMPLEMENTARIA

3.^a EDICIÓN 2020

José Luis Gil Ibáñez

Magistrado

COLEX 2020

Copyright © 2020

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.

Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados; no obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.

Editorial Colex S.L., habilitará a través de la web www.colex.es un servicio online para acceder al texto con las eventuales correcciones de erratas. Además, como complemento a su libro, dispondrá de un servicio de actualizaciones operativo durante la vigencia de la edición adquirida.

© José Luis Gil Ibáñez

© Editorial Colex, S.L.

Polígono Pocomaco, parcela I, Edificio Diana, portal centro 2,

A Coruña, 15190, A Coruña (Galicia)

info@colex.es

www.colex.es

I.S.B.N.: 978-84-18025-99-0

Dep. Legal: C 454-2020

LEYENDA ICONOS



Texto modificado



Texto nuevo

ABREVIATURAS

Art./Arts.	Artículo/s
BOE	Boletín Oficial del Estado
CC / C.Civil	Código Civil
CE	Constitución Española
DA / D.A.	Disposición Adicional
DDT / D.DT.	Disposición Derogatoria
DF / D.F.	Disposición Final
DT / D.T.	Disposición Transitoria
LBRL	Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
LCSP	Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
LPAC	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
LRJPAC	Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Norma derogada)
LRJSP	Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
RDDP	Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
RDL	Real Decreto Ley
RDLeg	Real Decreto Legislativo
RGLCAP	Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
STJUE / SSTJUE	Sentencia/s del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS / SSTS	Sentencia/s del Tribunal Supremo
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TRLCSP	RDLeg. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Norma derogada)

SUMARIO

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

PREÁMBULO	17
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales	30
Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.	30
Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación	30
Sección 2.ª Negocios y contratos excluidos	38
Capítulo II. Contratos del sector público	46
Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales	46
Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada	55
Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados	61
LIBRO PRIMERO	71
TÍTULO I. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público ..	71
Capítulo I. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público	71
Capítulo II. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato	82
Capítulo III. Perfección y forma del contrato	86
Capítulo IV. Régimen de invalidez	88
Capítulo V. Del recurso especial	97
TÍTULO II. Partes en el contrato	115
Capítulo I. Órgano de contratación	115
Capítulo II. Capacidad y solvencia del empresario	119
Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público	119
Subsección 1.ª Normas generales y normas especiales sobre capacidad	119
Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar	125
Subsección 3.ª Solvencia	136
Subsección 4.ª Clasificación de las empresas	140
Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar	146

SUMARIO

Subsección 1. ^a Capacidad de obrar	146
Subsección 2. ^a Prohibiciones de contratar	146
Subsección 3. ^a Solvencia	147
Subsección 4. ^a Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de Registros o listas oficiales de contratistas.	156
Capítulo III. Sucesión en la persona del contratista.	157
TÍTULO III. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión	158
Capítulo I. Normas generales.	158
Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público	166
TÍTULO IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público	172
Capítulo I. Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas.	172
Sección 1. ^a Garantía provisional	172
Sección 2. ^a Garantía definitiva.	174
Sección 3. ^a Garantías prestadas por terceros y preferencia en la ejecución de garantías	181
Capítulo II. Garantías exigibles en otros contratos del sector público.	182
LIBRO SEGUNDO	183
TÍTULO I. Disposiciones generales	183
Capítulo I. De las actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas.	183
Sección 1. ^a De la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas	183
Subsección 1. ^a Expediente de contratación	184
Subsección 2. ^a Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.	189
Sección 2. ^a De la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas	202
Subsección 1. ^a Normas generales	202
Subsección 2. ^a Procedimiento abierto	253
Subsección 3. ^a Procedimiento restringido	260
Subsección 4. ^a Procedimientos con negociación	263
Subsección 5. ^a Diálogo competitivo	270
Subsección 6. ^a Procedimiento de asociación para la innovación	273
Subsección 7. ^a Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos.	275
Sección 3. ^a De los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos	279
Subsección 1. ^a Efectos de los contratos.	279
Subsección 2. ^a Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos.	282
Subsección 3. ^a Ejecución de los contratos	287
Subsección 4. ^a Modificación de los contratos	312
Subsección 5. ^a Suspensión y extinción de los contratos	320
Subsección 6. ^a Cesión de los contratos y subcontratación	338

SUMARIO

Capítulo II. Racionalización técnica de la contratación	346
Sección 1.ª Normas generales	346
Sección 2.ª Acuerdos marco	346
Sección 3.ª Sistemas dinámicos de adquisición	350
Sección 4.ª Centrales de contratación	353
Subsección 1.ª Normas generales	353
Subsección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal. Sistema estatal de contratación centralizada	354

TÍTULO II. De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas

Capítulo I. Del contrato de obras	356
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras	356
Sección 2.ª Ejecución del contrato de obras	363
Sección 3.ª Modificación del contrato de obras	369
Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de obras	373
Sección 5.ª Resolución del contrato de obras	377
Capítulo II. Del contrato de concesión de obras	382
Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras	382
Sección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones	386
Sección 3.ª Construcción de las obras objeto de concesión	386
Sección 4.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la Administración concedente	388
Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario	388
Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración	391
Sección 5.ª Régimen económico financiero de la concesión	393
Sección 6.ª Financiación privada	400
Subsección 1.ª Emisión de títulos por el concesionario	400
Subsección 2.ª Hipoteca de la concesión	402
Subsección 3.ª Otras fuentes de financiación	405
Sección 7.ª Extinción de las concesiones	405
Capítulo III. Del contrato de concesión de servicios	410
Sección 1.ª Delimitación del contrato de concesión de servicios	410
Sección 2.ª Régimen jurídico	411
Subsección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios	411
Subsección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios	412
Sección 3.ª Ejecución del contrato de concesión de servicios	412
Sección 4.ª Modificación del contrato de concesión de servicios	415
Sección 5.ª Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios	419
Sección 6.ª Resolución del contrato de concesión de servicios	421
Sección 7.ª Subcontratación del contrato de concesión de servicios	423
Sección 8.ª Regulación supletoria del contrato de concesión de servicios	423
Capítulo IV. Del contrato de suministro	423
Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro	423

SUMARIO

Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro	424
Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de suministro	427
Sección 4.ª Resolución del contrato de suministro	428
Capítulo V. Del contrato de servicios	430
Sección 1.ª Disposiciones generales	430
Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios	432
Sección 3.ª Resolución de los contratos de servicios	434
Sección 4.ª De la subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras	435
LIBRO TERCERO	437
TÍTULO I. Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas	437
TÍTULO II. Contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores	439
LIBRO CUARTO	441
TÍTULO I. Órganos competentes en materia de contratación	441
Capítulo I. Órganos de contratación	441
Capítulo II. Órganos de asistencia	445
Capítulo III. Órganos consultivos	447
Capítulo IV. Elaboración y remisión de información	460
TÍTULO II. Registros Oficiales	462
Capítulo I. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas	462
Capítulo II. Registro de Contratos del Sector Público	466
TÍTULO III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos	467
DISPOSICIONES ADICIONALES	469
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	497
DISPOSICIONES DEROGATORIAS	499
DISPOSICIONES FINALES	499
ANEXO I. Trabajos contemplados en el artículo 13	508
ANEXO II. Lista de productos contemplados en el artículo 21.1.a) en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por los órganos de contratación del sector de la defensa	518
ANEXO III. Información que debe figurar en los anuncios	523
ANEXO IV. Servicios especiales a que se refieren los artículos 22.1.C), 135.5 y la disposición adicional trigésima sexta	534

SUMARIO

ANEXO V. Listado de convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental a que se refiere el artículo 201	537
ANEXO VI. Códigos CPV de los servicios y suministros a los que se refiere la disposición adicional cuarta relativa a los contratos reservados	538
INDICE ANALÍTICO	541

LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

I. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público	571
II. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas	611

**LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO**

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014

–BOE n.º 272, de 9 de noviembre de 2017–

**FELIPE VI
REY DE ESPAÑA**

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

La legislación de contratos públicos, de marcado carácter nacional, encuentra, no obstante, el fundamento de muchas de sus instituciones más allá de nuestras fronteras, en concreto, dentro de la actividad normativa de instituciones de carácter internacional, como es el caso de la OCDE, de UNCITRAL –en el ámbito de la ONU–, o, especialmente, de la Unión Europea. La exigencia de la adaptación de nuestro derecho nacional a esta normativa ha dado lugar, en los últimos treinta años, a la mayor parte de las reformas que se han ido haciendo en los textos legales españoles.

En concreto, la última Ley de Contratos del Sector Público encontró su justificación, entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición comunitaria, como fue la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

En la actualidad, nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Con este fin, aparecen las tres nuevas Directivas comunitarias, como son la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la más novedosa, ya que carece de precedente en la normativa comunitaria, como es la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

Estas Directivas constituyen la culminación de un proceso iniciado en el seno de la Unión Europea en el año 2010, que después de diversas propuestas y negociaciones primero en la Comisión, luego en el Consejo de la Unión Europea y finalmente, entre el Parlamento y el Consejo, fue finalmente aprobado por aquel, el 15 de enero de 2014, siendo publicadas estas normas en el DOUE el 28 de marzo de 2014.

Las nuevas directivas vienen a sustituir a la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y Directiva 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, aprobadas hace ahora una década, y que habían sido transpuestas al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público –posteriormente derogada y sustituida por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre–, y la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, respectivamente.

Con esta normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Asimismo, se hacía preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para garantizar la seguridad jurídica e incorporar diversos aspectos resaltados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública, lo que también ha sido un logro de estas Directivas.

II

Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-precio.

Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.

Se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas». Así se establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

Por último, conviene señalar que, mediante la presente Ley se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, institución de larga tradición jurídica en el derecho español, y la Directiva 2014/24/UE, de 26

de febrero de 2014, sobre contratación pública, dejando la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales a otra ley específica, que asimismo incorporará al ordenamiento jurídico español la parte de la Directiva 2014/23/UE que resulte de aplicación a los sectores citados.

Asimismo, también hay que destacar que, si bien el motivo determinante de la presente Ley es la transposición de las dos Directivas citadas, no es el único. Así, esta Ley, teniendo como punto de partida dicha transposición, no se limita a ello, sino que trata de diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos.

III

El sistema legal de contratación pública que se establece en la presente Ley persigue aclarar las normas vigentes, en aras de una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia. Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.

En este sistema, se sigue el esquema creado por la anterior regulación de 2007, que establece como uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador, que se impone como consecuencia de la incorporación al derecho español de la anterior Directiva comunitaria de 2004. Así, tradicionalmente, la normativa de contratos públicos se hizo pivotar sobre el concepto de contrato de la Administración Pública. Sin embargo, la incorporación de las anteriores Directivas comunitarias, dio lugar a un cambio de planteamiento, que ahora se mantiene en la nueva Ley, salvo lo referente a las instrucciones internas de contratación, y que permitía distinguir los regímenes jurídicos de los contratos públicos según la entidad contratante fuera o no un poder adjudicador. No obstante, este cambio de planteamiento no impide que la regulación de los contratos de las Administraciones Públicas, tanto en sus disposiciones generales, como respecto de cada tipo de contrato, siga siendo la parte troncal de esta Ley y la referencia de cualquier contrato que se haga por una entidad del sector público.

Desde un punto de vista objetivo, el otro eje fundamental en el que se apoya el sistema de la regulación de los contratos públicos contenido en la presente Ley, como ya se hacía en la regulación anterior, es el relativo a la distinción entre los contratos sujetos a regulación armonizada y aquellos que no lo están, basada en la superación de ciertas cuantías económicas, o umbrales comunitarios, lo que nos permite, a su vez, diferenciar el régimen jurídico que se aplica a cada uno de ellos, proveniente de la anterior regulación de 2007 y que se mantiene en la actualidad.

IV

El articulado de esta Ley se ha estructurado en un Título Preliminar dedicado a recoger las disposiciones generales en esta materia y cuatro libros sucesivos,

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

CÓDIGOS COMENTADOS

Esta edición recoge la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público*, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las *Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014*, y que deroga el anterior texto refundido, aprobado por *Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre*.

Se establecen las concordancias entre el articulado de uno y de otro texto, y se incorpora a los nuevos preceptos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que se considera útil para facilitar la aplicación, la comprensión y la interpretación del articulado, al tiempo que se actualizan los pronunciamientos de dichos órganos judiciales.

La obra se completa con el *Reglamento General de 2001* y con el *Reglamento de 2009* de desarrollo parcial de la *Ley 30/2007*, vigentes en lo que no se opongan a la referida *Ley 9/2017*.

ISBN: 978-84-18025-99-0



9 788418 025990